

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

CONSULTA - SENTENCIA	
DEMANDANTE	LUIS FERNANDO VALENCIA VILLEGAS
DEMANDADO	COLPENSIONES
RADICADO	05001-31-05-009-2021-00175-01
MAGISTRADA PONENTE	MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
TEMA	Retroactivo pensional en Pensión de Invalidez – intereses moratorios
DECISIÓN	Revoca, Modifica y Confirma

Medellín, cinco (05) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Estudiado, discutido y aprobado en sala virtual

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los magistrados ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA, LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZÁBAL y como ponente MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO, en acatamiento de lo previsto por el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020, y surtido el traslado correspondiente, procede a proferir sentencia, en grado jurisdiccional de Consulta en favor de la entidad pública demandada, dentro del presente proceso, promovido por el señor **LUIS FERNANDO VALENCIA VILLEGAS** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**.

Después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 034**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

I. – ASUNTO

Es materia de la Litis, conocer en grado jurisdiccional de Consulta, en favor de COLPENSIONES, la sentencia que profirió el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín, en la audiencia pública celebrada el día 25 de abril de 2022, conforme lo establece el artículo 69 del CPT y SS.

II. – HECHOS DE LA DEMANDA

Como fundamento de las pretensiones incoadas con la demanda, se expuso, en síntesis, que el señor LUIS FERNANDO VALENCIA VILLEGAS tiene 62 años de edad, se encuentra afiliado a COLPENSIONES desde el año 1978 y reunió un total de 812 semanas cotizadas hasta julio de 2000.

Agregó que estuvo residenciado en España, donde sufrió un percance de salud consistente en accidente cerebro vascular que le dejó secuelas de carácter permanente, entre ellas, pérdida permanente de la movilidad en medio cuerpo, lo que a la postre lo obligó a regresar a Colombia, dada la imposibilidad para desempeñarse laboralmente en aquel país.

Indicó que le fue calificada la pérdida de capacidad laboral por el Departamento de Medicina Laboral de COLPENSIONES, a través del dictamen Nro. DML3404325 del 10 de enero de 2019 y se le otorgó una pérdida de capacidad laboral del 62,9% de origen común, estructurada el 4 de julio de 2018.

Adujo que, en el tiempo en que estuvo domiciliado en España, efectuó algunas semanas de cotización, que sumadas al tiempo cotizado en Colombia, le permiten reunir más de 1.000 semanas.

Manifestó que en varias oportunidades solicitó a COLPENSIONES el reconocimiento de la pensión de invalidez bajo la condición más beneficiosa por contar con más de 300 semanas al 1º de abril de 1994 o, la pensión especial de vejez por invalidez y que, la entidad recurrentemente le negó el derecho.

Indicó que el 10 de diciembre de 2020 interpuso acción de tutela en contra de COLPENSIONES, la cual fue conocida por el Juzgado 1º de Familia de Medellín y tramitada bajo el radicado 05 001 31 10 001 2020 00439 00 (confirmada en segunda instancia por sentencia del 9 de febrero de 2020, dictada por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Medellín), despacho que accedió parcialmente a la protección constitucional mediante sentencia del 15 de enero de 2021, ordenándole a la entidad analizar la posibilidad de concederle la pensión de invalidez bajo los presupuestos de las sentencias de la Corte Constitucional SU-442 de 2016 y SU-556 de 2016 que desarrollan la condición más beneficiosa.

Se duele de que COLPENSIONES, al dar cumplimiento a la sentencia de tutela, profirió la Resolución SUB162296 del 28 de enero de 2021, ordenando el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez bajo los presupuestos de las sentencias de la Corte Constitucional SU-442 de 2016 y SU-556 de 2016, aplicando el principio de la condición más beneficiosa, en cuantía de salario mínimo legal mensual vigente desde el 1º de febrero de 2021, omitiendo pronunciarse sobre el retroactivo pensional del demandante, causado desde el 4 de julio de 2018.

III. – PRETENSIONES

Solicitó, se condene a Colpensiones a reconocer y pagarle el retroactivo pensional por invalidez, desde el 4 de julio de 2018 (fecha de estructuración de la invalidez) hasta el 31 de enero de 2021 (calenda anterior al ingreso a nómina), los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la indexación de las sumas objeto de condena, lo que ultra y extra petita se halle probado y las costas procesales del juicio.

IV. – RESPUESTA A LA DEMANDA

Una vez admitida la demanda, se dispuso notificar a la entidad demandada.

COLPENSIONES contestó la demanda a través de escrito visible en el PDF 14 del expediente digital, a través de la cual aceptó en su mayoría los hechos de la demanda; se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, y formuló las excepciones perentorias que denominó *“INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN A CARGO DE COLPENSIONES DE RECONOCER RETROACTIVO DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ A LA PARTE DEMANDANTE, IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE INTERESES MORATORIOS DEL ARTÍCULO 141 DE LA LEY 100 DE 1993, IMPROCEDENCIA DE RECONOCIMIENTO SIN DESCUENTOS EN SALUD, PRESCRIPCIÓN, BUENA FE DE LA ENTIDAD DEMANDADA, IMPOSIBILIDAD DE CONDENA EN COSTAS, IMPROCEDENCIA DE LA INDEXACIÓN y la EXCEPCIÓN GENÉRICA”*.

V. - DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

En audiencia pública celebrada el 25 de abril de 2022, el Juez de conocimiento, concluyendo que no se había configurado el fenómeno extintivo de la Prescripción, condenó a Colpensiones a reconocer y pagar al demandante, la suma de \$28.512.042, a título de retroactivo pensional calculado entre el 4 de julio de 2018 al 31 de enero de 2021, teniendo en cuenta 13 mesadas pensionales al año, facultando a la entidad a realizar los descuentos en salud a que hubiere lugar. Condenó a Colpensiones a pagar los intereses moratorios sobre dicho retroactivo, desde el 5 de agosto de 2019, y hasta el pago efectivo de la obligación, y le impuso a la entidad la obligación de pagar las costas procesales por valor de \$1.650.000.

Los argumentos en que se amparó el A quo, partieron de destacar que la causación y disfrute de la pensión de invalidez se encuentran regulados en el inciso final del artículo 40 de la Ley 100 de 1993, estableciendo que la pensión

de invalidez se reconoce a solicitud de parte interesada y se reconoce a partir de la estructuración de dicho estado.

Tuvo en cuenta que la entidad demandada, actuó en cumplimiento de un fallo de tutela que había proferido el juez de familia el 15 de enero de 2021 y que fue confirmado por la sala laboral de esta corporación en segunda instancia mediante sentencia del 9 de febrero de 2020, a través del cual reconoció de manera definitiva la pensión de invalidez al señor LUIS FERNANDO VALENCIA VILLEGAS, y en el que se ordenó a COLPENSIONES que estudiara la pensión de invalidez del demandante en aplicación de la condición más beneficiosa, bajo los presupuestos de las sentencias de la Corte Constitucional SU-442 de 2016 y SU-556 de 2016.

De esta manera, argumentó que en el caso concreto no existía ninguna razón válida para que la prestación no se reconociera desde la fecha de estructuración (4 de julio de 2018), fecha establecida por COLPENSIONES en el dictamen de calificación Nro. DML3404325 del 10 de enero de 2019, en el que se le otorgó al demandante una pérdida de capacidad laboral del 62,9% de origen común.

Partiendo de que la prestación se causó el 4 de julio de 2018, y que el retroactivo pensional se reclamó el 4 de abril de 2019, contabilizó los 4 meses para el reconocimiento de la pensión desde dicha fecha, ordenando el pago de los intereses moratorios desde el 5 de agosto de 2019. Su tesis de procedencia de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 se sustentó en que las autoridades administrativas se encuentran obligadas al reconocimiento de las prestaciones con fundamento en el precedente de la Corte Constitucional, que establece cuales son las condiciones y los criterios de interpretación para validar si alguien cumple con los requisitos para que le sea aplicada la condición más beneficiosa.

VI GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA

Teniendo en cuenta que la decisión no fue apelada por las partes, en virtud del artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, dicha decisión fue remitida a este tribunal en grado jurisdiccional de consulta, en favor de COLPENSIONES.

Alegatos de conclusión:

En la oportunidad procesal, el apoderado judicial de COLPENSIONES, Dr. LUIS FERNANDO VALENCIA VILLEGAS portador de la T.P. 271.442 del C.S. de la J., a quien se le reconoce personería para actuar en los términos del memorial de sustitución poder allegado al plenario, presentó sus alegatos de conclusión, solicitando la modificación de la sentencia de primer grado, pues debe tenerse en cuenta que la pensión de invalidez de origen común del señor LUIS FERNANDO VALENCIA VILLEGAS, se debe estudiar bajo la normatividad vigente conforme a la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral, la cual fue el 04 de julio de 2018. Bajo este presupuesto, la norma aplicable es la 100 de 1993 modificada por la Ley 860 de 2003.

Que la entidad negó la pensión a la parte actora, en cumplimiento de un mandato legal, es decir, al momento de solicitar dicha prestación, el demandante no cumplía con los requisitos de ley para acceder a ella, por lo que la administradora se limitó a la negativa del reconocimiento por lo que la ley y la constitución le permiten, ya que las decisiones plasmadas en los actos administrativos no pueden válidamente ser argumentadas con motivos de equidad, desconociendo la legislación vigente, ya que como Entidad de carácter público debe someterse al imperio de la Ley, pues los administradores no pueden según la Constitución Política de Colombia, hacer si no lo que está expresamente permitido y entre esas cosas, no está tomar decisiones de equidad, pues lo contrario sería prevaricato, y como en el presente caso no se le podía conceder la pensión de invalidez.

Que el demandante no acreditó los requisitos ante COLPENSIONES para ser beneficiario de la pensión de invalidez y, en virtud que la misma fue

reconocida con base a lo ordenado en un fallo de tutela, sin determinar el alcance o extremos temporales de la prestación, esta se realizó a corte de nómina teniendo en cuenta el carácter subsidiario de la acción constitucional, lo que también hace improcedente la condena a intereses moratorios.

Conforme a la anterior crónica procesal, pasa la Sala a resolver de fondo, previas las siguientes

VII. – CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Los presupuestos procesales, requisitos indispensables para regular la formación y desarrollo de la relación jurídica procesal, como son demanda en forma, Juez competente, capacidad para ser parte y comparecer al proceso se encuentran cumplidos a cabalidad en el caso objeto de estudio, lo cual da mérito para que la decisión que se deba tomar en esta oportunidad sea de fondo.

Naturaleza jurídica de la pretensión.-: Retroactivo pensional e intereses moratorios en Pensión de Invalidez.

Grado Jurisdiccional de Consulta: La competencia de este colegiado en esta oportunidad se extiende a todos los aspectos de la Litis, pudiendo revisarse integralmente la decisión del A quo a través de la cual condenó a COLPENSIONES a reconocer y pagar al actor retroactivo pensional por invalidez con los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, de conformidad al artículo 69 del CPT y SS.

A efectos de dar solución a la controversia jurídica planteada, se tendrán como supuestos fácticos, probados e indiscutidos en el proceso los siguientes:

Que, mediante Dictamen Nro. DML3404325 del 10 de enero de 2019 realizado por COLPENSIONES, al demandante le fue dictaminada una pérdida de capacidad laboral del 62,9%, de origen común, estructurada el 4 de julio de 2018 (PDF 4 del expediente digital).

Que, luego de varias reclamaciones de la pensión de invalidez por parte del actor a COLPENSIONES y la expedición de varios actos administrativos que negaron el derecho pensional reclamado, e incluso, haber acudido el actor al juez constitucional, la entidad expidió la Resolución SUB16296 del 28 de enero de 2021 (PDF 12 del expediente), a través de la cual dio cumplimiento a la sentencia de tutela del 15 de enero de 2021, dictada por el Juzgado Primero de Oralidad de Familia de Medellín, reconociendo la pensión en cuantía del salario mínimo legal mensual vigente a partir del 1º de febrero de 2021.

Estando claro lo anterior, es preciso recordar que el disfrute de la pensión de invalidez se encuentra regulado expresamente en el artículo 40 de la Ley 100 de 1993, disposición que establece que *“la pensión de invalidez se reconocerá a solicitud de parte interesada y comenzará a pagarse, en forma retroactiva, desde la fecha en que se produzca tal estado.”*.

En el sub judice, la estructuración de la invalidez se dio a partir del 4 de julio de 2018, y en el expediente no obra ninguna prueba que dé cuenta de que el asegurado se encontraba incapacitado en los periodos anteriores a dicha fecha, ya que, según historia laboral del demandante visible en el PDF 14 del expediente, se advierte que su última cotización se realizó en el ciclo julio del año 2000.

En tal sentido, advierte esta Sala que el juez de primera instancia, al ordenar el pago del retroactivo pensional de la pensión de invalidez del demandante desde el 4 de julio de 2018, fecha de la estructuración de la invalidez, fue consecuente con la regla normativa establecida en los artículos 40 de la Ley 100 de 1993 y 10º del Decreto 758 de 1990, advirtiendo, además, que no existe prueba alguna en el expediente de incapacidades posteriores a la fecha de estructuración de la invalidez. En consecuencia, habrá de **confirmarse** tal reconocimiento.

La competencia de este colegiado en grado de consulta en favor de Colpensiones, que le ha permitido revisar el anterior aspecto, también impone la necesidad de revisar el monto del retroactivo pensional ordenado por el A quo en favor del asegurado entre el 4 de julio de 2018 y el 31 de enero de 2021, calenda anterior al ingreso a nómina de pensionados.

En la sentencia se ordenó pagar al demandante la suma de **\$28.512.042**, a título de retroactivo pensional calculado entre el 4 de julio de 2018 al 31 de enero de 2021, teniendo en cuenta 13 mesadas pensionales al año, facultando a la entidad a realizar los descuentos en salud a que hubiere lugar.

Si bien los extremos de contabilización se encuentran ajustados a derecho, como quiera que en el presente caso no se configuró la extinción de mesadas pensionales, ya que entre la causación del derecho y la presentación de la demanda no alcanzaron a transcurrir más de 3 años, esta sala encuentra que el A quo erró en la liquidación del retroactivo pensional, el cual no debe corresponder a la suma de \$28.512.042, sino de **\$28.476.042**, por lo que se modificará el numeral 2º de la parte resolutive de la sentencia de primera instancia, teniendo en cuenta que la consulta en favor de COLPENSIONES así lo impone, ya que el A quo reconoció un retroactivo pensional superior en la suma de \$36.000.

Realizadas las operaciones aritméticas correspondientes, este colegiado advierte que el error del A quo operó en el cálculo del retroactivo pensional comprendido entre agosto y diciembre de 2018, en tanto para dicho lapso que comprende 6 mesadas incluyendo la adicional de diciembre contabilizó la suma de \$4.723.452, cuando en realidad 6 mesadas a razón del valor del salario mínimo por \$781.242, equivale a la suma de \$4.687.452.

En todo lo demás, se confirmarán los aspectos relacionados con la fecha de disfrute declarada (4 de julio de 2028), el tema de la prescripción (no operó la misma) y la orden del juez de autorizar a COLPENSIONES a deducir los aportes en salud del monto del retroactivo pensional.

Respecto a los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, esta sala encuentra que no es acertada la decisión del juez de primera instancia al ordenar su procedencia, si se tiene en cuenta que COLPENSIONES negó administrativamente el derecho con fundamento en la ley y apoyada en criterios de interpretación válidos frente a una situación que le implicaba un doble salto normativo hasta el Acuerdo 049 de 1990, teniendo en cuenta la postura del órgano jurisdiccional de cierre de la especialidad laboral frente al

tema. Distinto es que en la jurisdicción constitucional, el juez de tutela haya ordenado a COLPENSIONES el estudio de la prestación bajo los presupuestos jurisprudenciales de las sentencias de la Corte Constitucional SU-442 de 2016 y SU-556 de 2016 que desarrollan la condición más beneficiosa. Ante tal situación, nótese como incluso COLPENSIONES procedió en el mismo mes de enero de 2021, casi que de manera inmediata a proferir la Resolución SUB16296 del 28 de enero de 2021 (PDF 12 del expediente), a través de la cual dio cumplimiento a la sentencia de tutela del 15 de enero de 2021, dictada por el Juzgado Primero de Oralidad de Familia de Medellín, reconociendo la pensión en cuantía del salario mínimo legal mensual vigente a partir del 1º de febrero de 2021, esto es, sin que hubiere incurrido en ningún retardo.

En consecuencia, esta sala **revocará** el numeral 4º de la parte resolutive de la sentencia que se conoce en consulta, en cuanto ordenó el pago de los intereses moratorios en favor del señor LUIS FERNANDO VALENCIA VILLEGAS, para en su lugar ABSOLVER a COLPENSIONES del pago de los mismos, y ordenar en su lugar que COLPENSIONES pague la indexación de las sumas objeto de condena, calculada desde la fecha de su exigibilidad hasta el momento del pago, teniendo en cuenta la depreciación monetaria y el hecho notorio de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda.

La indexación ordenada comprende la siguiente fórmula:

ÍNDICE FINAL

ÍNDICE INICIAL x VALOR A INDEXAR – VALOR A INDEXAR

Costas procesales en segunda instancia:

Teniendo en cuenta que esta sala ha conocido este proceso en grado jurisdiccional de consulta, no habrá lugar a la interposición de costas procesales a ninguna de las partes, como quiera que las mismas no se han causado.

Sin más asuntos que resolver, pasa la Sala a proferir la decisión de segunda instancia.

VIII. - DECISIÓN.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR el numeral 4º de la parte resolutive de la sentencia que se conoce en consulta, de fecha y procedencia conocidas, en cuanto ordenó el pago de los intereses moratorios en favor del señor **LUIS FERNANDO VALENCIA VILLEGAS**, para en su lugar **ABSOLVER** a **COLPENSIONES** del pago de los mismos, y ordenar en su lugar que **COLPENSIONES** pague la indexación de las sumas objeto de condena, calculada desde la fecha de su exigibilidad hasta el momento del pago, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia.

SEGUNDO: MODIFICAR el numeral 2º de la parte resolutive de la sentencia de primera instancia, en cuanto condenó a **COLPENSIONES** a pagar al señor **LUIS FERNANDO VALENCIA VILLEGAS** un retroactivo pensional por valor de \$28.512.042, comprendido entre el 4 de julio de 2018 al 31 de enero de 2021 para, en su lugar, **CONDENAR** a **COLPENSIONES** a pagar al demandante la suma de **\$28.476.042**, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia.

TERCERO: CONFIRMAR dicha sentencia en todo lo demás, de conformidad a lo expuesto.

CUARTO: ABSTENERSE de imponer condena en costas procesales de segunda instancia, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

QUINTO: En su debida oportunidad, devuélvase el expediente al juzgado de origen.

SEXTO: SE ORDENA la notificación por EDICTO de esta providencia, y se autoriza su reproducción virtual a las partes del proceso.

Los magistrados



MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA
Magistrado



LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL
Magistrada